



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-15841221- -APN-JGM RESOL JGM RECHAZO RECLAMO PARLAMENTARIO DEL MERCOSUR OVIEDO RICARDO CRISTÓBAL

VISTO el Expediente N° EX-2019-15841221-APN-JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Leyes Nros. 23.981, 24.560 y 27.120, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante IF-2019-15842087-APN-JGM, con fecha 14 de marzo de 2019, el señor D. Ricardo Cristóbal OVIEDO (D.N.I. N° 14.940.679) presentó una nota en la cual alega haber asumido la suplencia del cargo de Parlamentario del MERCOSUR por el Distrito Regional FORMOSA a partir del 10 de diciembre de 2015, indicando que en su opinión, desde que se encuentra ejerciendo el cargo de Parlamentario del MERCOSUR le resulta aplicable lo establecido en el artículo 16 de la Ley N° 27.120, intimando al titular de la Jurisdicción al pago de dieta, gastos de representación, desarraigo, subsidio, becas y cualquier otro tipo de concepto que resulte pertinente.

Que considera también que lo dispuesto en el artículo 43, inciso d) del Reglamento Interno del Parlamento del MERCOSUR, que dispone que corresponde a la Mesa Directiva de dicho Parlamento el resolver acerca del reembolso de gastos y el pago de remuneración de los Parlamentarios, no desplaza la aplicación de la Ley N° 27.120 en los términos de su artículo 16.

Que recuerda que la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR no ha establecido ninguna disposición respecto de las remuneraciones de los Parlamentarios, fijando el presupuesto del rubro en CERO (0), y que la ausencia de normativa específica dictada por el órgano competente habilita la entrada en vigencia del artículo 16 de la Ley N° 27.120, con la correspondiente equiparación del Parlamentario del MERCOSUR a un Diputado Nacional.

Que, asimismo, hace reserva de cuestionar la Decisión Administrativa N° 152 de fecha 3 de marzo de 2016, por considerarla inconstitucional, en tanto se equipara a los Parlamentarios del MERCOSUR a los empleados de la Administración y no con los Diputados Nacionales.

Que plantea que de acuerdo a las competencias atribuidas por el artículo 37 de la Ley N° 24.156, el Jefe de Gabinete de Ministros se encuentra habilitado para disponer el pago de las remuneraciones y demás conceptos derivados de la equiparación con los Diputados Nacionales, y que dicha habilitación fue

expresamente concedida mediante el artículo 68 de la Ley N° 27.168.

Que, en otro orden de ideas, requiere que, en el hipotético e improbable caso se interpretara que corresponde al mismo Parlamento hacerse cargo de las remuneraciones de los Parlamentarios, el Jefe de Gabinete de Ministros arbitre los medios necesarios para que se transfieran al Parlamento las partidas que permitan realizar el pago de las remuneraciones y demás importes que correspondan, a los Parlamentarios en general y la reclamante en particular, en virtud de las competencias atribuidas a aquél por el artículo 37 de la Ley N° 24.156.

Que, finalmente aclara que en caso de no hacerse lugar al pedido accionará judicialmente por el cobro de los conceptos mencionados, haciendo reserva de caso federal, considerando afectados los principios de soberanía popular y democracia, de la forma representativa de gobierno, el derecho al trabajo y la propiedad privada.

Que por la Ley N° 23.981 la REPÚBLICA ARGENTINA aprobó el TRATADO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN MERCADO COMÚN ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, suscripto en la Ciudad de Asunción REPÚBLICA DEL PARAGUAY, el 26 de marzo de 1991, que consta de VEINTICUATRO (24) artículos y CINCO (5) Anexos y en su artículo 10 prevé que “El Consejo es el órgano superior del Mercado Común, correspondiéndole la conducción política del mismo y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos para la constitución definitiva del Mercado Común”.

Que, asimismo, por la Ley N° 24.560 se aprobó el “PROTOCOLO ADICIONAL AL TRATADO DE ASUNCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MERCOSUR”, Protocolo de Ouro Preto, suscripto entre las mismas partes en Ouro Preto REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, el 17 de diciembre de 1994, que consta de CINCUENTA Y TRES (53) artículos y UN (1) Anexo.

Que este Protocolo Adicional, en su artículo 32, regula las funciones de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, previéndose en el inciso III que le corresponde: “Organizar los aspectos logísticos de las reuniones del Consejo del Mercado Común, del Grupo Mercado Común y de la Comisión de Comercio del MERCOSUR y, dentro de sus posibilidades, de los demás órganos del MERCOSUR, cuando las mismas se celebren en su sede permanente. En lo que se refiere a las reuniones realizadas fuera de su sede permanente, la Secretaría Administrativa del MERCOSUR proporcionará apoyo al Estado en el que se realice la reunión”.

Que el artículo 45 del mismo cuerpo normativo establece que “La Secretaría Administrativa del MERCOSUR contará con un presupuesto para atender sus gastos de funcionamiento y aquellos que disponga el Grupo Mercado Común. Tal presupuesto será financiado, en partes iguales, por contribuciones de los Estados Partes”.

Que por otra parte, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR aprobado por la Ley N° 26.146, prevé en su artículo 20 lo siguiente: “1. El Parlamento elaborará y aprobará su presupuesto, el que será solventado con aportes de los Estados Partes, en función del Producto Bruto Interno y del Presupuesto Nacional de cada Estado Parte. 2. Los criterios de contribución de los aportes mencionados en el inciso anterior, serán establecidos por Decisión del Consejo del Mercado Común, tomando en cuenta la propuesta del Parlamento”.

Que la precitada norma, en su artículo 11 detalla como requisitos e incompatibilidades: “1. Los candidatos a Parlamentarios deberán cumplir con los requisitos exigibles para ser Diputado Nacional, según el derecho del Estado Parte respectivo. 2. El ejercicio del cargo de Parlamentario es incompatible con el desempeño de un mandato o cargo legislativo ejecutivo en los Estados Partes, así como con el desempeño de cargos en los demás órganos del MERCOSUR. 3. Serán aplicables, asimismo, las demás incompatibilidades para ser legislador, establecidas en la legislación nacional del Estado Parte correspondiente”.

Que de lo expuesto se concluye, por un lado, que la financiación de las actividades de los órganos del MERCOSUR tiene un régimen específico, al que los Estados Parte contribuyen de acuerdo a las cuotas y mecanismos que en cada caso se establece.

Que, en sentido concordante, se manifestó más recientemente la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en la causa N° 20734/2017/CA2-CA1 “Assef, Alberto Emilio c/ EN s/ amparo ley 16.986”, al confirmar la sentencia de la jueza de grado por la que se rechazó la acción de amparo deducida por Alberto Emilio Assef contra el Estado Nacional, la que tenía por objeto reclamar el pago de su remuneración y aportes previsionales como parlamentario del Mercosur, en forma retroactiva a diciembre de 2015.

Que, la Sala IV, luego de efectuar una reseña de la estructura institucional del MERCOSUR y del régimen que regula el financiamiento del citado organismo internacional, señaló en el considerando 6° de su decisorio que “...*compete a su Mesa Directiva resolver lo relacionado con el reembolso de gastos y el pago de la remuneración de los parlamentarios (art. 43, inc. b Reglamento Interno del Parlamento del Mercosur). De modo que no existe una omisión antijurídica imputable al Estado Nacional, pues la circunstancia de que la Mesa Directiva inicialmente no hubiera adoptado decisiones sobre tales aspectos (propios de su competencia), no conmueve el hecho de que la cuestión está regulada en la normativa mencionada y por ende, la alegada obligación del Estado parte carece de sustento legal con base en la específica previsión contenida en el art. 16 de la ley 27.120 (esta Cámara, Sala II, causa “Gil Lozano”, citada). A fortiori, la circunstancia de que el Parlamento del Mercosur, con posterioridad al precedente aludido hubiera adoptado una posición en relación con la remuneración de sus miembros (no convalidada —como se reseñó— por el Consejo del Mercosur), desmerece ciertamente la aplicación supletoria de la norma de derecho interno referida*”.

Que, por lo demás, debe resaltarse que los precitados acuerdos interestaduales no asignan a los Estados Miembro facultades para determinar los niveles retributivos de los Parlamentarios del MERCOSUR, aunque hubieran sido elegidos en su territorio, ni precisan que los importes que se pudieran abonar a dichos Parlamentarios resulten susceptibles de ser deducidos de las cuotas fijadas como aporte del Estado por acuerdo con sus pares.

Que de ninguno de los instrumentos citados surge que los Parlamentarios del MERCOSUR tengan facultades de requerir a los países miembro, ningún tipo de contribución para sustentar las actividades oficiales del MERCOSUR o de sus órganos, debiendo respetarse la autonomía presupuestaria de los órganos del MERCOSUR y la forma de contribuir a los mismos que han pactado los Estados Miembros.

Que, en consecuencia, corresponde desestimar el pedido formulado por el señor D. Ricardo Cristóbal OVIEDO, dado que no corresponde abonar suma alguna a simple requerimiento de los Parlamentarios del MERCOSUR en materia de remuneraciones o viáticos, en tanto la forma de contribuir a los gastos del MERCOSUR tiene un régimen especial que debe ser respetado, tal como se desprende de lo dispuesto en la normativa antes citada.

Que, tampoco podría el Jefe de Gabinete de Ministros “transferir partidas” del Presupuesto Nacional a una persona de derecho público internacional distinta de la REPÚBLICA ARGENTINA, como es el MERCOSUR, dado que excedería en forma manifiesta sus atribuciones.

Que mediante IF-2019-56065041-APN-DD#JGM e IF-2019-38777089-APN-DGAJ#JGM, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado intervención.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 103 de la Constitución Nacional, 30 de la Ley N° 19.549 y 8 del Decreto N° 977 del 6 de julio de 1995 y su modificatorio.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Recházase el pedido formulado por el señor D. Ricardo Cristóbal OVIEDO (D.N.I. N° 14.940.678) relacionado con el pago de dieta, gastos de representación, desarraigo, subsidio, becas y demás conceptos que en su criterio derivarían de su condición de Parlamentario del MERCOSUR, por las razones expuestas en los Considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber que lo resuelto agota la instancia administrativa en los términos del artículo 31 de la Ley N° 19.549.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese y archívese.